

JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA.

Ibagué (Tolima), dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017).

ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a estudiar la posibilidad de conceder el beneficio de la amnistía al sentenciado **YAMID MAYORGA PRADA**, quien se encuentra actualmente recluso en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Purificación (Tolima).

ANTECEDENTES PROCESALES

Por hechos ocurridos desde el año 2010 (en relación con la pertenencia del sentenciado al Frente 25 de las FARC), el Juzgado Penal del Circuito de Purificación (Tolima), mediante sentencia del 14 de marzo de 2016, condenó a **YAMID MAYORGA PRADA**, al ser hallado penalmente responsable del delito de rebelión, a la pena de **48 meses de prisión**, multa de 66.67 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Además, se le denegó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria¹.

YAMID MAYORGA PRADA ha estado privado de la libertad por cuenta de este asunto desde el **6 de noviembre de 2015**².

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

DE LA AMNISTÍA

Partiendo del supuesto de que *"la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, -que- es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla"*³ y, además, que se requería de los desarrollos normativos para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, se tramitó y promulgó la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016⁴, que tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y conexos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados.

Acorde con dichas precisiones, en la Ley 1820 de 2016 se establecen los condicionamientos necesarios para su activación con respecto, entre otros, de los miembros de las FARC, como organización que suscribió el Acuerdo

¹ Fol. 31-40 C. 2

² Fol. 261-263 C. 1

³ Artículo 5° de la Ley 1820 de 2016

⁴ Normatividad que encuentra soporte en la normatividad internacional que señala, verbi gratia, en el artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de 1977, que *"a la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado."*

Final de Paz con el Gobierno Nacional, de cara a los fines de terminación del conflicto armado interno y consolidación de la paz, así como en consonancia con los fines de un Estado Social y Democrático de Derecho (asegurar la paz -Preámbulo Constitución Política-, convivencia pacífica y vigencia de un orden justo -art. 2° ídem-).

Conforme se establece en el Art. 3°, dicha normatividad se *"aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas."*

Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica.

En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno".

Además, en el Art. 7° de dicha normatividad se señala que los beneficios allí contemplados prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, **especialmente sobre actuaciones penales.**

Ahora bien, la extinción de la sanción penal se encuentra regulada en el Art. 88 del Código Penal, que en su numeral 3° establece la **amnistia impropia** como causal que impide la ejecución de las sanciones penales, para lo cual se requiere de una ley que la desarrolle.

Recuérdese que la distinción entre amnistia propia e impropia radica en que la primera apunta a la extinción de la acción penal y la segunda a fenecimiento o cesación de la ejecución de las sanciones penales, al punto que se señala, doctrinalmente, que esta última implica que *"si el procesado ya ha descontado parte de la sanción el resto se extingue ipso facto, con olvido total del hecho y el autor para efectos jurídicos."*⁵

En atención a la expedición de esa normatividad, resulta necesario verificar si **YAMID MAYORGA PRADA** podría ser favorecido con los beneficios allí contemplados, concretamente en relación con la amnistia a que hace alusión el Art. 15⁶, en tanto que en el presente asunto fue condenado con ocasión de unos hechos perpetrados cuando ostentaba la calidad de miembro activo del Frente XXV del grupo guerrillero autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia "FARC" y con anterioridad

⁵ VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO. Manual de Derecho Penal. Parte General. Cuarta Edición. Librería Jurídica Comilibros. 2009. Páginas 1203.

⁶ "Artículo 15. Amnistia de iure. Se concede amnistia por los delitos políticos de 'rebelión', 'sedición', 'autonomía', 'conspiración' y 'seducción', usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con ley, a quienes hayan incurrido en ellos."

a la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz, tal como lo exige el Art. 17 ibidem, que consagra:

"Artículo 17. Ámbito de aplicación personal. La amnistía que se concede por ministerio de esta ley de conformidad con los artículos anteriores, se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz.

Se aplicará a las siguientes personas, tanto nacionales colombianas como extranjeras, que sean o hayan sido autores o partícipes de los delitos en grado de tentativa o consumación, siempre que se den los siguientes requisitos:

1. Que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP.

2. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las FARC-EP.

3. Que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley.

4. Quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP. En este supuesto el interesado, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al Fiscal o Juez de Ejecución de Penas competente, la aplicación de la misma aportando o designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior."

En este orden de ideas, deviene nitido que el citado condenado se encuadra en la situación contemplada en el inciso 1° del Art. 17 de la Ley 1820 de 2016, pues obsérvese que en la sentencia condenatoria, proferida el 14 de marzo de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de Purificación (Tolima), se "estableció que el señor **YAMID MAYORGA PRADA**, pertenece a una red de apoyo al terrorismo, cumpliendo funciones de miliciano del Frente 25 de las FARC."

De igual forma, en dicha providencia se puso de presente que **YAMID MAYORGA PRADA**, "es una persona que conocen como perteneciente a las FARC, como miliciano, en la zona de prado" y "se encargaba de garantizar la comunicación y la seguridad de corredores estratégicos para el movimiento de comisiones del Frente 25 de las FARC, logrando mantener el control territorial en los límites de los departamentos de Tolima y Cundinamarca."

Adicionalmente, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y el SISIPEC del INPEC, se evidencia que el único requerimiento que aparece en contra de **YAMID MAYORGA PRADA** es el relacionado con esta actuación.

Entonces, deviene nitido que el citado condenado resulta beneficiario de la amnistía, pues el delito de rebelión, por el que resultó condenado en estas diligencias, se encuentra incluido en el artículo 15 de la Ley 1820 de 2016, toda vez que se trata de un delito político, cuyo sujeto pasivo es el Estado y el bien jurídico afectado fue el Régimen Constitucional y Legal vigente⁷, el cual fue ejecutado sin ánimo de lucro personal, tal como fuera resaltado por el Despacho fallador:

"de paso, se lesionó un bien jurídico como es el Régimen Constitucional y Legal -antijuridicidad material-, pues, es evidente que al desempeñarse como miliciano, encargado de hacer inteligencia para determinar posibles víctimas de secuestro y extorsión con el fin de recolectar dineros para la causa del grupo armado al margen de la ley; estaban cumpliendo actividades en beneficio de la guerrilla, por lo tanto hacía parte de este grupo insurgente que persigue el derrocamiento del Gobierno Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente."

Así las cosas, al haber sido juzgado, **YAMID MAYORGA PRADA**, como rebelde vinculado como miliciano a la organización subversiva FARC, resulta viable darle tratamiento de delincuente político, de modo tal que puede acceder a los beneficios contemplados en la Ley 1820 de 2016.

Al respecto, adviértase que el artículo 7º de la citada norma, establece que *"la amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 sobre extinción de dominio."*

Dado que se advierte que **YAMID MAYORGA PRADA** reúne los requisitos exigidos por la Ley 1820 de 2016 para obtener la amnistía, resulta procedente concederla, previa suscripción del acta de compromiso a que se refiere el Art. 18, en el que se aclara que *"respecto de los integrantes de las FARC-EP que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente"*, lo cual se corresponde con la situación que actualmente aquel está afrontando.

Como consecuencia de lo anterior, se declarará extinguida la sanción penal principal de **48 meses de prisión**, impuesta a **YAMID MAYORGA PRADA** por el Juzgado Penal del Circuito de Purificación (Tolima),

⁷ Artículo 8 de la Ley 1820 de 2016.

mediante sentencia del 14 de marzo de 2016, al hallarlo penalmente responsable del punible de rebelión.

Además, se dispondrá la libertad inmediata y definitiva de **YAMID MAYORGA PRADA**, así como la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas, acorde a lo preceptuado en el artículo 41 de la Ley 1820 de 2016. Esta disposición se ajusta a los mandatos constitucionales que pregonan la reactivación de ese tipo de derechos en la medida en que *"El delito político, que difiere claramente del hecho punible común, no inhibe para el futuro desempeño de funciones públicas, ya que puede ser objeto de perdón y olvido, según las reglas constitucionales aplicables para instituciones como la amnistía. Los procesos de diálogo con grupos alzados en armas y los programas de reinserción carecerían de sentido y estarían llamados al fracaso si no existiera la posibilidad institucional de una reincorporación integral a la vida civil, con todas las prerrogativas de acceso al ejercicio y control del poder político para quienes, dejando la actividad subversiva, acogen los procedimientos democráticos con miras a la canalización de sus inquietudes e ideales."* (Sentencia C-194 de 2005).

Ahora bien, no sobra resaltar que el artículo 14 de la Ley 1820 de 2016 contempla lo siguiente:

"Artículo 14. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o de cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz."

"Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dada por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se le atribuyan al interior de la misma."

Destáquese que la amnistía regulada en la Ley 1820 de 2016, es una figura de pleno derecho, razón por la cual se considera que el acta de compromiso a que alude el Art. 18, puede ser suscrita ante los funcionarios judiciales encargados de su reconocimiento⁸.

⁸ Distinto a las demás actas de compromiso que por expreso mandato legal tienen que suscribirse ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente, en relación con la sanción pecuniaria y dado que se evidencia que su ejecución no está atribuida a una autoridad judicial, sino que, por el contrario, corresponde a una actuación administrativa en cabeza de las Oficinas de Cobro Coactivo de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, se remitirá copia de esta decisión a esa Dependencia (Seccional Tolima), con el fin que se estudie la posibilidad de disponer la extinción respectiva.

Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE IBAGUÉ - TOLIMA

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la amnistia de la conducta punible de rebelión ejecutada por el sentenciado **YAMID MAYORGA PRADA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.006.089.841 de Bogotá (Cundinamarca)**, conforme a la situación fáctica planteada en la sentencia condenatoria proferida el 14 de marzo de 2016 por el Juzgado Penal del Circuito de Purificación (Tolima).

SEGUNDO: DECLARAR extinguido el tiempo restante de la sanción penal principal de **48 meses de prisión**, impuesta a **YAMID MAYORGA PRADA** por el Juzgado Penal del Circuito de Purificación (Tolima), mediante sentencia del 14 de marzo de 2016, al hallarlo penalmente responsable del punible de rebelión.

TERCERO: DISPONER que para acceder al beneficio concedido, el sentenciado **YAMID MAYORGA PRADA** deberá suscribir diligencia de compromiso que contenga la obligación contemplada en el artículo 18 de la Ley 1820 de 2016. Una vez efectuado lo anterior, se librará la correspondiente boleta de libertad.

CUARTO: CONCEDER la libertad al amnistiado **YAMID MAYORGA PRADA**, de manera inmediata y definitiva, siempre y cuando haya suscrito la diligencia de compromiso y no sea requerido por otra autoridad judicial.

QUINTO: DISPONER la rehabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas a favor de **YAMID MAYORGA PRADA** y, en razón a ello, **OFICIAR** a la Procuraduría General de la Nación para que, en caso de encontrarse activa dicha sanción, proceda a actualizar la información y a materializar la restitución de derechos aquí dispuesta.

SEXTO: ENVIAR copia de esta decisión a la Dirección Seccional de Administración Judicial de la Seccional Tolima (Oficina de Cobro Coactivo), con el fin que se estudie la posibilidad de aplicar la Ley 1820 de 2016 y disponer la extinción de la pena de multa.

CONDENADO: YAMID MAYORGA PRADA
C.C. 1.006.089.841
DELITOS: REBELIÓN
RADICACIÓN N° 11001-60-00-000-2015-01946-00 N.I. 286-18
AUTO INTERLOCUTORIO N° 0055

7

SÉPTIMO: DAR AVISO DE LA PRESENTE DECISIÓN a las autoridades correspondientes y **REMITIR** copia de esta providencia y del acta de compromiso que suscriba **YAMID MAYORGA PRADA** a la Alta Consejería Presidencial para la Paz y al Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, para los fines legales pertinentes.

OCTAVO: Para la notificación de esta providencia al interno, así como para suscribir la diligencia de compromiso y librar la respectiva boleta de libertad y el oficio confirmatorio para ante el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Purificación, **LÍBRESE DESPACHO COMISORIO** ante los Juzgados promiscuos Municipales de Purificación (Tolima).

NOVENO: REMITIR copia de esta providencia ante la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Purificación (Tolima), para que obre en la hoja de vida del condenado.

DÉCIMO: Una vez en firme esta providencia, **REMÍTASE** la actuación al Juzgado fallador para su archivo.

Contra la presente decisión proceden los recursos de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

DIEGO ALBERTO PRIETO DUARTE
JUEZ

PACB

Por medio del art.15 de la Ley 1.820 del 30 de diciembre de 2016, se consagra la "Amnistía de IURE" para los delitos políticos de rebelión y otros, y los delitos conexos con éste, como el concierto para delinquir (art.16), incluyendo toda circunstancia de agravación punitiva (art.16.3).

En el art.18 de esa legislación, se estipula que la amnistía que se concede por su ministerio, se aplicará: i) a partir del día de su entrada en vigor, siempre y cuando los delitos hubieren sido realizados antes del Acuerdo Final de Paz (suscrito por el Presidente de la República y el jefe de la organización política al margen de la ley autodenominada FARC-EP); ii) a personas nacionales colombianas como extranjeras; iii) que sean o hayan sido autores o partícipes; iv) de delitos políticos (art.15) y conexos (ar.16) agravados o no (art.16.3); v) consumados o en grado de tentativa; vi) siempre que se dé (uno) de los siguientes requisitos: "Que la providencia judicial condene...por pertenencia o colaboración con las FARC-EP."

En esa misma normativa se establece que el (la) privado (a) de la libertad beneficiario con la amnistía de "IURE", deberá suscribir acta en la que se comprometa a "no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente".

Ahora bien, consagra el art.88 de la Ley 599 de 2000: **"Extinción de la sanción penal.** Son causas de extinción de la sanción penal:

1. (...)

2. (...)

3. La amnistía impropia ("corresponde a una causa de extinción de la punibilidad en concreto que favorece a delinquentes políticos que han sido condenados por sentencia ejecutoriada").

(...)".

Así las cosas, el despacho puede afirmar que, a Cuazaluzán C., Ortiz G., Cortés C., y Pasuy L., les fue concedido por ministerio de la Ley 1.820 del 30

de diciembre de 2016, el beneficio de la amnistía (impropia) de las penas principales y accesoria que les fuera impuestas por el juzgado único penal del circuito especializado de Tumaco N.

En consecuencia, las decisiones que obliga a tomar lo argumentado en precedencia, no pueden ser otras que, las de declarar la extinción, por amnistía (de iure e impropia), de las condenas: privativa de la libertad, pecuniaria y accesoria fijadas a **Cuazaluzán C., Ortiz G., Cortés C., y Pasuy L.**, por el juzgado referido, a través de la sentencia ad initio relacionada, y su libertad inmediata, de acuerdo con lo prescrito por los artículos 88.3 de la Ley 599 de 2000, y 15, 16, 17.1, 18.2., 19.3, 34 y 41 de la Ley 1.820 del 30 de diciembre de 2016.

En mérito de lo expuesto, el juzgado tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Cali V.,

R E S U E L V E:

Primero: Declarar la extinción, por amnistía impropia (de iure), de las condenas de 60 meses de prisión y multa equivalente a 455 ss.mm.ll.mm.vv. (para la fecha de los hechos), y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que le fueran impuestas a **Freddy Giovanni Cuazaluzán Castillo, Luis Jairo Ortiz García. Wilson Gustavo Cortés Cortés y Franklin Pasuy López**, por el juzgado único penal del circuito de Tumaco N., a través de la sentencia del 2 de marzo de 2016, de acuerdo con los artículos 88.3 de la Ley 599 de 2000, y 15, 16, 17.1, 18.2, 19.3, 34 y 41 de la Ley 1.820 del 30 de diciembre de 2016, y la parte motiva de este proveído.

Segundo: Disponer, previa suscripción de acta en la que se comprometan a "no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente", su libertad inmediata. Librar las órdenes de libertad que correspondan.

Tercero: En firme este auto informar lo decidido a las autoridades que tuvieron conocimiento de la sentencia, anotar lo apropiado en el sistema de gestión

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO TERCERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD

N.U.R.: 2013-00303

N.I.: 1610

Interlocutorio Nro.: 0100

Cali V., veinticuatro (24) de enero de dos mil
diecisiete (2017).

OBJETO DE LA PROVIDENCIA:

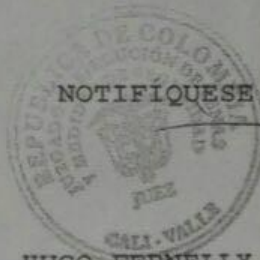
Procede el despacho a decidir la solicitud de declarar la extinción, por amnistía impropia (de iure), de las condenas impuestas a Freddy Giovanny Cuazaluzán Castillo, Luis Jairo Ortiz García, Wilson Gustavo Cortés Cortés y Franklin Pasuy López, en la sentencia del 2 de marzo de 2016, por el juzgado único penal del del circuito especializado de San Andrés de Tumaco N., propuesta por la Dra. Claudia M. Rivera Q., como su representante judicial, de acuerdo con los artículos 88.3 de la Ley 599 de 2000, y 15, 16, 17.1, 18.2, 19.3, 34 y 41 de la Ley 1.820 del 30 de diciembre de 2016.

PARA RESOLVER EL DESPACHO CONSIDERA:

Los referidos fueron condenados por el juzgado citado, por medio de la sentencia registrada, a las penas: principales de 60 meses de prisión y multa equivalente a 455 ss.mm.11.mm.vv. (para la fecha de los hechos), y accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término, como autores-responsables del concurso de las conductas punibles de **rebelión y concierto para delinquir agravado**, sin habérseles concedido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, ni la prisión domiciliaria, según hechos judicializados el 25 de octubre de 2013.

correspondiente, y devolver la actuación al juzgado de origen.

Cuarto: Contra esta providencia proceden los recursos ordinarios de reposición y/o apelación.



NOTIFIQUESE Y CÚPLASE

HUGO FERNELLY FRANCO OBANDO
JUEZ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN: Por medio de la cual se notifica el contenido del auto interlocutorio n° 0100, a los intervinientes en la actuación.

MINISTERIO PÚBLICO

CONDENADO

CONDENADO

CONDENADO

CONDENADO

REPRESENTANTE JUDICIAL

SECRETARIO ADMINISTRATIVO